El acuerdo al que llegaron con las autoridades contempló los siguientes aspectos: los alineamientos se hacían según lo dispuesto en el Plan General Urbano de la cabecera municipal, consultando a los vecinos respecto a la “aplicación de esa disposición” y considerando al comité de barrio. Respecto a los créditos y su cobro, las autoridades no cedieron en nada, salvo que convenían en hacer un análisis confrontando informaciones proporcionadas por los comités de barrio con las que obraban en la CERSJ para de ahí ver a quiénes de las “personas ancianas, incapacitadas o enfermas” se les podría proporcionar “casas sin costos”.

Respecto al otorgamiento de créditos y terrenos sin costo para los inquilinos, convinieron en que “los grupos de inquilinos podrían trabajar con la comisión estatal en la construcción de sus viviendas”, como si en el contexto de la negociación se pudiera acordar lo contrario, luego señalaron a un grupo de 400 inquilinos “que podrían participar en este programa”, y eso es todo, es decir, tampoco cedieron un ápice.

Frente a la demanda de que los créditos fueran en efectivo, las autoridades convinieron en que “una vez acordadas con la comisión estatal de reconstrucción las características de las obras y el volumen del crédito, el acreditado podrá comprar algunos materiales al costo en el Parque de Materiales de la Comisión Estatal. Cada semana se pagará el gasto hecho y documentado según el avance de la obra”. Como se ve lo que concesionó la autoridad sale de la concepción de lo que es un “crédito” y consecuentemente tampoco aquí cedieron.

En la demanda de reconocimiento y crédito para grupos organizados, el acuerdo establece que: “Hay crédito para grupos organizados individualizando cada contrato” con lo que tampoco cedieron porque el sustento de los créditos sigue siendo individual, aunque tal vez se ha perfilado un cierto reconocimiento a los grupos organizados.

En otros asuntos como el reconocimiento a los asesores técnicos el acuerdo fue muy institucional, es decir, “la ayuda técnica que se preste por profesionales registrados o instituciones será válida cuando esté debidamente firmada por el responsable”. De todas maneras, este acuerdo resultó útil a los damnificados en la medida en que salvaba la obstinación de las autoridades municipales de sólo acreditar a los técnicos que ellos y sólo ellos reconocían.

Respecto a la demanda de asesoría en ingeniería sísmica, las autoridades respondieron que ya se contaba con un estudio de la Universidad de Guadalajara, cosa que era falsa²⁶. Por otra parte, el requerimiento de que

se respetara a los damnificados el derecho a recibir ayudas directas de otros organismos, recibió la siguiente respuesta: "Es derecho de todos recibir la ayuda que se les ofrezca venga de donde venga (pero) coordinándola con la comisión estatal de reconstrucción para mayor beneficio de todos..." Evidentemente la respuesta se dio en estricto apego a los lineamientos gubernamentales que continuaban condicionando la recepción de ayuda a su administración. Y finalmente, ante la demanda de "que se creen fuentes de trabajo para los damnificados", la respuesta "sí, se crearán fuentes de trabajo", cosa que cierra con broche de oro una "negociación" sólo formal, en la que las autoridades nada o muy poco cedieron.

Los resultados de aquella confrontación fueron precisamente los que marcaron la división o la dualidad de la reconstrucción en Ciudad Guzmán. La CERSJ mantuvo sus actividades con mucho dinero pero con pocos damnificados a los que se les agregaron los industriales, profesionistas y comerciantes afectados.

La organización popular cerró filas y aglutinó a 1.600 familias para trabajar en cooperativas de autoconstrucción, agregando organismos como PROVIPO (Provivienda Popular) que surgen de experiencias populares en lucha por viviendas y que prácticamente formuló alternativas para inquilinos; así como otras organizaciones vinculadas a las religiosas.

Tengo la impresión de que ante esto la CERSJ reblandeció sus requisitos y trámites para no evidenciar su quiebra política y atraer a damnificados, con la seducción de la ayuda fácil pero no sujeta a negociación, con lo cual además pretendería minar las filas de la organización popular.

De todas maneras la reconstrucción institucional ha mostrado enormes flaquezas y la escasa vinculación entre lo que se dice y lo que se hace. Valga pues comentar el caso de la concreción del fraccionamiento de la Cruz Roja anunciado tempranamente por el gobernador de la entidad, cuya concreción no pude apreciar en el último período de trabajo de campo (marzo-abril), mientras que sí pude corroborar que muchas de las acciones crediticias manejadas por la CERSJ se canalizaban al fraccionamiento municipal "Constitución", que hasta antes de los sucesos sísmicos tenía pocas demandas y consecuentemente poco éxito, a pesar de que el mandatario estatal lo tomó como ejemplo de la experiencia que respaldaría la creación del fraccionamiento de la Cruz Roja.

Otro asunto de singular importancia lo constituye la fijación de requisitos para conceder créditos que formuló la CERSJ y que establecía el ingreso de 2.5 veces el salario mínimo como condición para recibir ayuda y

sobre todo si consideramos la jactanciosa actitud de las autoridades de haber realizado censos y estudios socioeconómicos entre la población afectada, ayudados por sus empleados y otros de la Universidad de Guadalajara, en momentos inmediatos a la catástrofe. No se entiende, en consecuencia, la fijación de ese requisito a menos que se quisiera ayudar sólo a un grupo reducido de damnificados (que sí cubrirían ese requisito), o bien la situación se explicaría en razón de una muy deficiente coordinación de los esfuerzos institucionales de reconstrucción.

Cierto es —como ya señalé— que tuvieron que echar marcha atrás al respecto.

El asunto es que esos “errores” o deficiencias son extremadamente cuestionables en instancias de poder. Y hay que agregar la enorme prepotencia llevada al extremo por el ex presidente municipal de Ciudad Guzmán que advirtió gratuitamente a los damnificados respecto a que no se les regalarían casas.

Pero mucho también puede decirse, en el mismo sentido, de la CERSJ que dejando de reconocer la fuerza y vitalidad de la organización popular, le impuso sus determinaciones haciendo artificios prepotentes del manejo demagógico de una negociación formal abortada por los hechos. Salta a la vista, por lo demás, la escasa visión de los gobernantes al fijar las prioridades de la reconstrucción; sólo a quienes se hallan muy alejados de la realidad se les ocurre destinar el dinero de las donaciones para financiar los edificios públicos y las escuelas y anunciarlo cínicamente y sin ninguna explicación a quienes se encuentran, por la desgracia, en la calle. Por lo demás, la reconstrucción en Ciudad Guzmán sigue en marcha...

CONCLUSIONES

De los antecedentes

Ciudad Guzmán es pues una aglomeración urbana que tiene en su historia muchos capítulos de desastres provocados por eventos sísmicos y vulcanológicos. La conformación actual en el rango de la reproducción de la fuerza de trabajo es una consecuencia de diferentes fenómenos sociales y económicos que han establecido una serie de ocupaciones y subocupaciones de la población mayoritaria, ligada a la función urbana establecida por el cambio del rol regional, de un proceso de desintegración de las antiguas formas regionales y la integración de esos espacios a un desarrollo capitalista muy dependiente del gran capital nacional y transnacional. La reproducción de

la fuerza de trabajo se hace a partir de esas circunstancias en donde tanto el crecimiento natural como las migraciones del contexto rural hacia la aglomeración urbana ha determinado desde hace relativamente pocos años, una densificación demográfica que ha presionado sobre los ámbitos de vivienda, sobre las fuentes de empleo, y desde luego, sobre el consumo en todos los órdenes.

Económicamente la población mayoritaria de Ciudad Guzmán ha desplegado diversos mecanismos para enfrentar sus condiciones materiales en un contexto urbano que bien poco ha podido atender, tanto en el renglón del trabajo, como en el de la vivienda, como son los subempleos y el propio desempleo, que sólo ha asegurado la reproducción de las unidades domésticas basadas en niveles infrasubsistentes, en los que gracias a las relaciones de ayuda entre familias extensas se han podido mantener. Estos aspectos han sido reflejados en las estadísticas presentadas antes.

Socialmente los guzmanenses antes de los sismos de 1985 no habían desarrollado vínculos de organización globales para demandar la satisfacción de sus necesidades, sino que en ciertas instancias como la organización de los colonos de Cristo Rey, Provipo y algunos círculos de reflexión promovidos por el clero secular, entre otros casos, era en las que se generaban algunos mecanismos de defensa y/o demandas de mejores condiciones de vida.

El gobierno municipal había realizado algunos proyectos para dar salida a las demandas de vivienda, como lo fue el fraccionamiento Constitución, que para la población no presentaba una alternativa viable, tanto por dudas en un manejo administrativo como por carecer de los servicios urbanos indispensables.

La articulación de los gobiernos federal, estatal y municipal respecto al manejo de la ciudad (en los aspectos urbanos propiamente dichos) se había dado a partir del Plan General Urbano que contenía ciertas determinaciones de las cuales lo que concernía a los cambios vitales, y la limitación del crecimiento de la ciudad hacia el oriente, eran los que a ojos de los ciudadanos guzmanenses, se veían como los más amenazantes a sus ya precarias condiciones de sobrevivencia urbana.

De la emergencia y la reconstrucción

Cuando se sucedieron los temblores, se crearon los damnificados, intervino el Ejército, los municipales desalojaron y descombraron; llegó el gobierno y

su corte, luego el presidente y su corte, en fin se produjo en un corto lapso una gran movilización social. Los damnificados se empezaron a organizar para lo cual los núcleos anteriores de organización civil, desempeñaron un papel muy importante. El movimiento social, a mi juicio, desembocó en una serie de demandas que se encaminaban más bien hacia la solución de los problemas sociales más acuciantes, es decir, la vivienda y el empleo, que a "aminorar riesgos sísmicos". De hecho aquellos problemas habían sido des- nudados por los sismos, de tal suerte que este asunto me parece de extraor- dinaria relevancia en el terreno de los efectos producidos por los movimien- tos telúricos. En esta parte del proceso fue muy evidente que las autoridades de todos los rangos carecían de información respecto al asunto de los riesgos sísmicos, a pesar de la contundente historia tectónica y vul- canológica del lugar. Prueba de ello fue la búsqueda de información en ese momento relativa a ese problema y la improvisación de acciones (como los intentos de desalojo, cancelación de permisos de construcción, etcétera) que sólo acentuaron el descontento de los grupos de damnificados.

El concepto de "ajuste sísmico" puede nutrirse mucho con la experiencia de Ciudad Guzmán, y a mí me parece muy revelador el hecho de que las condiciones deficientes de existencia urbana —la miseria pues— hayan configurado una movilización social que hizo a un lado el riesgo sísmico (aunque no del todo, puesto que en los programas de construcción y recons- trucción de viviendas, tanto damnificados como autoridades, resolvieron olvidar al adobe como material de edificación) para orientarse a resolver la cuestión de la vivienda en el corto y mediano plazo. Sin plantearse, como punto de referencia en la toma de decisiones, otras alternativas que con- templan precisamente el riesgo sísmico o bien el de tipo vulcanológico que les ha creado históricamente muchos malestares. En este sentido muchos esfuerzos de la investigación de los riesgos naturales se han encaminado por los terrenos de la percepción, de los riesgos en la población, y a veces no se explican el porqué los núcleos sociales permanecen haciéndole frente a los riesgos aun cuando entienden la eventualidad de esos sucesos natura- les. La experiencia de Ciudad Guzmán, del sur de Jalisco, es sumamente importante porque ahí se pueden encontrar algunas respuestas sociales caracterizadas simple y llanamente por la ausencia de otras alternativas, y para ser más claro: la imposibilidad de acudir a otras acciones —mucho más eficientes en el aspecto de la seguridad— en las actuales condiciones de existencia social.

Para no dejar lo anterior a expensas de interpretaciones deformadoras, debo hacer otras precisiones. La primera es que no implicó la necesidad de hacer revoluciones sociales para terminar con los riesgos de los temblores. Más bien la realidad de la existencia social exige una atención cuidadosa que debe llegar a la explicación de las respuestas que ofrece socialmente un núcleo de población damnificada, como en el caso de Ciudad Guzmán. Debe quedar claro —para los investigadores de los riesgos naturales y a quien corresponda— que la justicia social es un concepto que no puede dejarse de lado cuando se discute la cuestión del “ajuste” o de “aminorar” los riesgos sísmicos.

Otra precisión: a nivel de la sociedad global, las responsabilidades frente a los riesgos de la naturaleza no deben diluirse en la “sorpresa” y la consecuente improvisación de acciones de respuesta. En este sentido la responsabilidad de un gobierno que administra los ingresos y los egresos de la sociedad, es mayor y su legitimidad está, en parte, sujeta a la forma en que encara esas responsabilidades.

Ahora, regresando al asunto de la justicia social, cabe hacer otra reflexión: en las indagaciones de Jackson y Burton (1980) se afirma que a pesar de que el ajuste predominante en el presente, que consiste en financiar la rehabilitación y la reconstrucción, es políticamente conveniente para los gobiernos, resulta ser, por otro lado, el que en opinión de los autores tiene un efecto más negativo en la reducción de los riesgos. Este planteamiento se basa en que ese hecho repercute en desviar el énfasis del enfrentamiento con la pérdida y en influir hacia los afectados un sentimiento de negación de responsabilidad respecto a los riesgos. Asimismo estiman que con ello el peso de la pérdida se distribuye (o repercute) en toda la sociedad, sugiriendo entonces que los riesgos sean de exclusiva responsabilidad de quienes están sujetos a ellas.

En el caso de Ciudad Guzmán, las acciones gubernamentales —por lo menos las vistas en el lapso de trabajo de campo— estuvieron muy alejadas de presentarse como una verdadera opción de financiamiento, tanto en rehabilitación como en la reconstrucción. La solidaridad civil nacional e internacional aunque se veía llegar fue canalizada en buena parte por los conductos oficiales de tal suerte que en el momento postdesastre, las acciones organizativas de los damnificados no desviaron su enfrentamiento respecto a las pérdidas sino más bien fue al contrario. Ahora bien, la cuestión de la responsabilidad en los riesgos es sumamente importante, y hay que intentar llegar a aquella aunque sea aproximadamente. ¿Cómo se pueden

fincar o absolver responsabilidades frente a los riesgos sísmicos? En otro tipo de sociedad seguramente habrá otras respuestas a la pregunta. En México buena parte de su territorio está sujeto a esos riesgos, empezando desde el norte de la Península de Baja California y llegando al centro, occidente y sur de Oaxaca que abarcan las áreas de mayor densidad demográfica. La ocupación del territorio, desde el punto de vista histórico, no se ha dado por considerar los riesgos naturales, sino en una secuencia de conquistas de espacios que ha tenido muchas implicaciones económicas, políticas y hasta estratégicas. Muchas de las zonas sismológicamente riesgosas, mantienen en la actualidad importantes explotaciones de recursos naturales y grandes producciones agropecuarias, como el caso del sur de Jalisco, que han aglutinado a fuertes núcleos de población. La concentración demográfica de la ciudad de México, de proporciones monstruosas, se ha dado precisamente porque es el lugar que ha centralizado las mayores alternativas productivas y en donde han llegado numerosas masas de población campesina de todos los rincones del país, aun de áreas no sísmicas. Por lo que en consecuencia propongo considerar lo siguiente:

- Los motivos de los grupos humanos para ocupar determinadas áreas, se deben, entre las principales razones, a necesidades de primer orden, como es el poder producir para reproducirse. En un país como el nuestro que no goza precisamente de una estructura socioeconómica equitativa, la población dentro de esos marcos se agrupa conformando una cierta división territorial de la producción, del trabajo, etc., de la que la sociedad global se sirve y reproduce; lo que en consecuencia hace que esa sociedad sea precisamente la responsable de que ciertos grupos humanos se hallen instalados en zonas de riesgos naturales. Dicho en otros términos: en una sociedad históricamente determinada, la distribución espacial de los agentes de la producción (tierra, trabajo y capital) corresponden a sus propias determinaciones, ya que es esa su base de reproducción y en consecuencia no les son ajenos aquellos factores de la naturaleza que ofrecen riesgos a alguna de sus instancias.
- Como la reconstrucción en Ciudad Guzmán está en marcha, no deseo formular otras observaciones concluyentes, sólo me interesa hacer una crítica a la manera en que las autoridades enfrentaron el problema de la reconstrucción. Durante la emergencia, los diferentes niveles de gobierno tuvieron un exceso de titubeos que más bien parecían reflejar sus propias contradicciones y la inexistencia de información respecto a

estos asuntos, como ya señalé. De tal manera que ello permite interpretar que sus acciones inmediatas y luego las que ejercieron cuando empezaron a clarificar su proyecto de reconstrucción, estaban muy alejados de un propósito real de asumir sus responsabilidades. La intervención militar en el momento de la emergencia pareció imponerse al vacío de autoridades y —honor a quien honor merece— a pesar de lo cuestionable del famoso Plan DN-III-E fue la única medida de gobierno que cumplió sus propósitos.

- En el corto período del proceso de reconstrucción que examiné, las relaciones entre los damnificados organizados y las autoridades tuvieron que romperse para seguir caminos diferentes, y a mi juicio, ello se debió a que cuando las autoridades empezaron a tomar las decisiones lo hicieron bajo un inflexible principio de autoridad que sólo los desautorizó. Ello es muy preocupante y me parece que justifica lo suficiente la legitimidad del proceso de reconstrucción popular. Y es preocupante no porque se deba conceder a la autoridad la preeminencia en las acciones de este tipo, sino porque las prácticas políticas de acopio de medios para la reconstrucción, enarboladas por los gobernantes, desestimaron la capacidad del pueblo lo que no hace sino desviar los verdaderos esfuerzos por resolver una desgracia que ha de ser temporal, en cuanto a las afectaciones primarias. Lo que quedó demostrado en ese entonces es que el pueblo no requiere de sanciones de la autoridad, respecto a su capacidad de regularse y que por el contrario, en determinado momento, la autoridad es un verdadero estorbo.
- Los efectos observables de los sismos en Ciudad Guzmán evidenciaron, en resumen, las contradicciones de clase que conforman a nuestra sociedad, las agudizaron, lo que consecuentemente caracterizó la movilización postdesastre. Si hago críticas a las acciones gubernamentales, es precisamente porque desempeñaron un papel importante en la movilización social, tratando de controlarla —y no sé hasta qué punto lo logren. Ciertamente debiera de conceder que el gobierno no es el culpable de todo, pero es un gran culpable cuando funciona denodadamente para mantener las condiciones que hacen explosión en momentos como el propio desastre sísmico. Tal vez otros alcances dejarían ver que no es el gobierno el estorbo, sino la sociedad misma que lo ha engendrado.

Deseo terminar este trabajo con la mención al asunto de la objetividad científica. Cuando la suerte de un pueblo está en cuestión, la objetividad

está de su parte, o dicho en otros términos, la objetividad se ciñe al derecho de ese pueblo a autodeterminarse. A lo largo de la exposición del trabajo se pudo perfilar tal vez, una posición parcial del autor, desde luego, al lado de la movilización popular, esto es cierto y lo confirmo en estas líneas. No hay razones para esconderlo. Las desgracias del pueblo mexicano no pueden esperar de la ciencia un papel neutral.

NOTAS

1. *El Noticiero*, semanario local, 29 de septiembre de 1985.
2. En entrevista con la directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guadalajara, profesora Alma Zambrano, celebrada el día 21 de octubre de 1985, ésta informó que la noche del 19 de septiembre, llegaron a la escuela ocho personas a solicitar albergue y que se les recibió con titubeos. Sólo cuando pidieron la autorización del rector de esa universidad dieron atención a los damnificados.
3. *El Sureño*, semanario local, 29 de septiembre de 1985.
4. Me inclino a pensar que esas informaciones aluden sólo a los damnificados que hicieron uso del albergue de la Universidad de Guadalajara.
5. *Uno Más Uno*, 17/III/86.
6. Informe de la XV zona militar publicado en *Excelsior*, 21/IX/85.
7. J. Delgadillo y M. Bassols, 1986.
8. S.D.N. El Plan DN-III-E y su aplicación en el Área del volcán Chichonal, en *El volcán Chichonal*, Instituto de Geología, UNAM, México, 1983, p. 90.
9. *Op. cit.*, p. 91.
10. C. Lomnitz, "La ingeniería en casos de desastre", Primer Seminario Nacional, Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, 1975. Tomado de J. Mejía, *Riesgo sísmico de las obras civiles en el estado de Michoacán*, Morelia, UMSNH, 1984.
11. Entrevista de campo, 20/X/85, no consigno nombres por la negativa de los militares a darlos; ofreciendo razones relativas a que en el instituto armado no se persiguen notoriedades personales. *Dixi et salvati animan meam*.
12. Según cálculos diversos: Comité de Reconstrucción del Sur de Jalisco, Gobierno Municipal, véanse notas anteriores.
13. Las encuestas cubren cerca del 25% de la población damnificada, 635 familias encuestadas, un poco más de 700 encuestas. El análisis se relaciona con el estudio de empleados de la Universidad de Guadalajara (referido antes) sobre los damnificados de su albergue.
14. *El Sureño*, 12/X/85.
15. En el artículo de Bassols y Delgadillo, p. 106, se señala, por voz de dos miembros del Comité para la Reconstrucción de Ciudad Guzmán (organización popular), que los créditos se estaban otorgando en forma de hipoteca, es decir, los damnificados debían entregar las escrituras de su casa-habitación para recibir el crédito.
16. *El Sureño*, 9/XI/85.
17. *El Sureño*, 23/X/85.
18. Este asunto es verdaderamente interesante y cuenta mucho para ilustrar el cómo la autoridad ha requerido de los técnicos y científicos para respaldar acciones arbitrarias. Aun sin contar con los suficientes argumentos de ciencia, el Ayuntamiento profirió amenazas contra los vecinos de Cristo Rey, al mismo tiempo que instó al Departamento de Planeación y Urbanización del estado de Jalisco a pronunciarse al respecto, y éste lo hizo, pero sin comprometerse a afirmar nada que no pudiese ser demostrado con pruebas (desde luego las geofísicas) cuyo acopio requería de tiempo. Por otro lado los vecinos de la citada colonia recibieron la colaboración de técnicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, quienes realizaron un estudio geotécnico del barrio,

- y fue suficiente para demostrar la habitabilidad de la colonia, aunque con determinadas restricciones. Todo ello obligó al Ayuntamiento a doblar las manos y, más aún, a reconstruir ahí mismo.
19. No deja de sorprender la demagogia más ramplona que suele acompañar las iniciativas del tratamiento del problema urbano derivado de los sismos pasados. Tengo conocimiento de que efectivamente fueron designados, a finales de noviembre de 1985 dos investigadores (uno geógrafo físico y el otro ingeniero geólogo) y tres estudiantes de la Facultad de Geografía de la Universidad Estatal, para elaborar un "análisis geológico de la cabecera municipal", aspecto que puede sólo contribuir muy parcialmente a un nuevo diseño del plan urbano.
 20. *Vid. El Sureño*, 8/II/86.
 21. *Uno Más Uno*, 17/III/86.
 22. *Vid.*
 23. Saldívar y Mancera, "Crónica del desastre de la colonia Cristo Rey, Cd. Guzmán, Jal", en Foro de Discusión y Análisis Recientes UGPM-Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, diciembre de 1985, y próxima publicación en la *Revista Posición*, UGPM, N° 4, 1986.
 24. Este problema ha sido apuntado por Delgadillo y Bassols, *op. cit.*, p. 106.
 25. Pliego petitorio de los damnificados de Ciudad Guzmán, Jalisco. Fechado el 18 de diciembre de 1985.
 26. Mi estancia en Ciudad Guzmán, en marzo de 1986, me permitió observar que justamente por la ausencia de estudios de ingeniería sísmica, era que las autoridades municipales escatimaban a los ciudadanos guzmanenses la concesión de permisos para construcción, formulando criterios completamente arbitrarios para restringir las obras de edificaciones en áreas donde aparentemente existía una presunta falla.

BIBLIOGRAFÍA

- Delgadillo, J. y Bassols (1986) "Ciudad Guzmán: los damnificados marginales". En: *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, N° 123, México.
- Jackson, E. e I. Burton (1980) "El proceso del ajuste humano al riesgo sísmico". En: *Terremotos. Evaluación y mitigación de su peligrosidad*, Ed. Blume/UNESCO, 1a. edición, Barcelona.
- Lomnitz, C. (1975) "La ingeniería en casos de desastre". Primer Seminario Nacional, Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Jalisco, Guadalajara, México.
- Lloret, N. y S. Lazcano (1985) *Estudio geotécnico de la colonia Cristo Rey o Montaña Oriente, Ciudad Guzmán, Jalisco*. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, México.
- Mejía, Joaquín (1984) *Riesgo sísmico en obras civiles en el estado de Michoacán*. Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Morelia, México.
- Ortiz, Martín y otros (1985) "Algunas consideraciones del medio físico en relación con los sismos de 1985 en Ciudad Guzmán, Jalisco; Lázaro Cárdenas, Michoacán; y Zihautanejo-Ixtapa, Gro.". En: *Foro de Análisis y Discusión sobre*

los sismos recientes, Unión de Geógrafos Progresistas de México, Universidad Nacional de México (UNAM), México, D.F.

Saldívar, Antonio y Federico MANCERA (1985) "Crónica del desastre de la colonia Cristo Rey o Montaña Oriente, Ciudad Guzmán, Jalisco". En: *Foro de análisis y discusión sobre los sismos recientes*, Unión de Geógrafos Progresistas de México, UNAM, México D.F.

Secretaría de la Defensa Nacional (1983) "El Plan DN-III-E y su aplicación en el área del Volcán Chichonal". En: *El Volcán Chichonal*, Instituto de Geografía, UNAM, México, D.F.

Secretaría de Programación y Presupuesto (1981) *Síntesis Geográfica de Jalisco*, México, D.F.

White, G. (1975) "La investigación de los riesgos naturales". En: R. Chorley, *Nuevas Tendencias en Geografía*, Instituto de Estudios de Administración Local, 1a. edición, Madrid.

CENSOS

(1960) *VIII Censo General de Población y Vivienda del estado de Jalisco*, Secretaría de Industria y Comercio, México, D.F.

(1970) *IX Censo General de Población y Vivienda del estado de Jalisco*, Secretaría de Industria y Comercio, México, D.F.

(1980) *X Censo General de Población y Vivienda del estado de Jalisco*, Secretaría de Programación y Presupuesto, México, D.F.

Fotografía Aérea (s/f) Vuelo 22-B. Comisión de Estudios del Territorio Nacional

PERIÓDICOS

(1985) *El Noticiero*, semanario local, Ciudad Guzmán, Jalisco, 29/IX/85.

(1985, 1986) *El Sureño*, semanario local, Ciudad Guzmán, Jalisco, 28/IX/85, 12/X/85, 9 y 23/XI/85 y 8/II/86.

(1985) *Excelsior*, 21/X/85.

(1986) *Uno Más Uno*, 17/III/86.